



Poder Judicial de la Nación

Reg. Interno N°

/2023

INCIDENTE DE ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN DE LA LEY 27.653 EN CAUSA N° CPE 1660/2018, “E. S.A. Y OTROS S/ INFRACCIÓN A LA LEY 24.769”.

CPE 1660/2018/2/CA2. Orden N° 34.499. Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, Secretaría N° 19. Sala “A”.

Buenos Aires, de septiembre de 2023.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por la defensa de J. P. y de D. P. contra la resolución por la cual se rechazaron los planteos de suspensión y extinción de la acción penal formulados en los términos de la ley 27.653 por aquella parte (confr. fs. 44/47 vta. y 49 de las presentes actuaciones).

El memorial por el cual la defensa de J. P. y de D. P. informó en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N. (confr. fs. 56/57 vta.).

Y CONSIDERANDO:

1º) Que, en la causa principal a la cual corresponde este incidente se investiga la presunta apropiación indebida de los aportes correspondientes al Sistema Único de la Seguridad Social retenidos a los empleados en relación de dependencia de E. S.A. por los períodos 2/2011 a 6/2012 y 1/2013 a 9/2016.

Respecto de los hechos vinculados a los períodos 2/2011 a 6/2012 y 1/2013 a 2/2016, por la resolución del 25/8/2023 recaída en el incidente CPE 1660/2018/1 se declaró extinguida la acción penal por prescripción, resolución ésta que fue apelada por la fiscalía actuante ante la instancia anterior, encontrándose en trámite ante esta Cámara el incidente de mención.

2º) Que, por la presentación obrante a fs. 6/7 de este incidente, J. P. y D. P. solicitaron la suspensión del ejercicio de la acción penal instada en la causa principal respecto de los nombrados, por encontrarse la deuda correspondiente a la totalidad de los hechos



objeto de investigación que, a criterio de aquella parte, no se encuentran prescriptos, es decir, aquellos vinculados con los períodos fiscales 3/2016 a 9/2016, incluida en el plan de facilidades de pago N° *****, consolidado por D. P. en los términos de la ley 27.653.

En aquella oportunidad, los nombrados acompañaron constancias de las que surge que D. P. se acogió al plan de pagos mencionado por el párrafo que antecede el 27/4/2022 por, entre otros conceptos adeudados correspondientes a los años 2009 y 2010, los aportes al sistema de la seguridad social adeudados por E. S.A. por los períodos 3/2016 a 9/2016.

Por la presentación mencionada se hizo saber que la moratoria establecida por el art. 5 de la ley 27.653 fue suscripta por D. P. y se solicitó la extensión de los beneficios derivados de aquélla a J. P..

Posteriormente, la defensa de J. y D. P. solicitó la extinción de la acción penal instada respecto de los hechos examinados vinculados con los períodos 3/2016 a 9/2016 por haberse cumplido íntegramente con el pago del plan de facilidades de pago aludido.

3º) Por la resolución recurrida, de fecha 4/4/2023, el juzgado de la instancia anterior rechazó los planteos de suspensión y extinción de la acción penal formulados en los términos de la ley 27.653.

Para expedirse en aquel sentido, el señor juez “a quo” compartió las consideraciones efectuadas por el fiscal actuante ante la instancia anterior por el dictamen obrante a fs. 26/29 y entendió que “...toda vez que la firma E. S.A. registra deudas con destino al régimen nacional de obras sociales por los períodos marzo a septiembre de 2016...aun cuando [D. P. y J. P.] informaron que: ‘...han cumplido íntegramente con el plan de facilidades [de pago] al que se han acogido respecto [del] beneficio establecido en el artículo 5 de la ley 27.653 de alivio fiscal...’ ...se permite concluir que no resulta aplicable al caso el beneficio de suspensión y/o extinción de la acción penal establecido por la ley 27.653...”.

4º) Que, por el recurso de apelación interpuesto y por el memorial presentado en la oportunidad establecida por el art. 454 del C.P.P.N., la defensa de J. y D. P. se agravió de la resolución recurrida por considerar que por aquélla se incurre en una errónea interpretación de las leyes 27.541 y 27.653 y de sus finalidades.





Poder Judicial de la Nación

La parte recurrente consideró que el pago efectuado resulta extintivo de la acción penal y que la decisión del magistrado de la instancia anterior evidenciaría un comportamiento contradictorio por parte del Fisco, en tanto el organismo recaudador aceptó el plan y percibió la totalidad de los conceptos incluidos en aquél, resultando incongruente la pretensión de negar a los imputados el beneficio que a tal efecto estableció la ley 27.653 sobre la base de la exigencia de que las obligaciones se hubieran tenido que cancelar antes de la entrada en vigencia de aquella ley.

5º) Que, conforme surge de la compulsa de este incidente y de las actuaciones principales por el Sistema de Gestión Judicial LEX100, sin perjuicio de los hechos en orden a los cuales se declaró extinguida la acción penal por prescripción por una resolución que no se encuentra firme (confr. incidente CPE 1660/2018/1), en la causa principal se investiga, en cuanto interesa a la presente, la apropiación indebida de los aportes previsionales retenidos a los empleados de E. S.A. por los períodos 3/2016 a 9/2016 por las sumas de \$ 1.461.342,24, \$ 1.384.503,97, \$ 1.345.311,63, \$ 1.532.579,24, \$ 1.317.769,38, \$ 1.292.164,45 y \$ 1.325.035,69, respectivamente.

El 27/4/2022, D. P. suscribió, a su nombre, el plan de facilidades de pago N° en los términos de la ley 27.653 respecto de, entre otros conceptos, deudas correspondientes a la seguridad social por los períodos 3/2016 a 9/2016 por las sumas aludidas por el párrafo que antecede.

Corresponde señalar que, conforme surge de lo informado por la A.F.I.P.-D.G.I., E. S.A. no registra pagos ni acogimiento a planes de facilidades por los períodos aludidos y el plan presentado por D. P. en los términos de la ley 27.653 el 27/4/2022 comprende saldos correspondientes a aportes con destino a la seguridad social de los períodos 3/2016 a 9/2016 que resultan coincidentes con los adeudados por E. S.A.

El organismo recaudador hizo también saber que, previo acogerse al plan de mención, D. P. efectuó dos presentaciones digitales por las cuales, en fechas 22/4/2022 y 25/4/2022, manifestó que a los fines de extinguir la acción penal instada en esta causa quería proceder a pagar la deuda de E. S.A. a través de la figura de responsable solidario de la moratoria, de acuerdo con lo establecido por el art. 46 de la R.G.



Nº 5101, pero que el sistema no le permitía efectuar la carga de esa manera. Agregó que había efectuado consultas en la web de A.F.I.P. y a la Agencia de la A.F.I.P. en la que E. S.A. se encuentra inscripta, pero que no había recibido respuestas que permitieran saber cómo proceder para poder acogerse a la moratoria en los términos aludidos.

La A.F.I.P.-D.G.I. adjuntó, asimismo, el certificado que acredita la condición de MIPyME de D. P. e hizo saber que se consultó la página web del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación para determinar si E. S.A. se encuentra inscripta como MIPyME, arrojando la consulta resultado negativo (confr. fs. 14/22).

Por su parte, a raíz de las medidas ordenadas por el juzgado de la instancia anterior a fin de determinar si se había decretado la quiebra de E. S.A., se determinó que, efectivamente, el 12/6/2018 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 11 decretó la quiebra de la sociedad de mención y en la misma fecha se dispuso la inhabilitación de la fallida (confr. fs. 410 vta./411, 420, 424, 426/430 vta. de la causa principal y fs. 11/11 vta. y 23/25 de este incidente).

Por último, corresponde señalar que de lo informado por el organismo recaudador también surge que por los períodos aludidos (3/2016 a 9/2016) se adeudan, a la fecha, los aportes presuntamente retenidos por E. S.A. a sus empleados en relación de dependencia con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales, por las sumas de \$ 257.483,25, \$ 243.696,16, \$ 236.919,34, \$ 269.453,06, \$ 231.847,92, \$ 227.339,70 y \$ 233.148,66, respectivamente.

La señora juez de cámara, doctora Carolina L.I. ROBIGLIO, agregó a lo expresado en forma conjunta:

6º) Que, corresponde recordar que por el art. 2º de la ley 27.562 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 26/08/2020), se sustituyó el art. 8 de la ley Nº 27.541, quedando el mismo redactado de la siguiente manera: *“Los contribuyentes y las contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de*





Poder Judicial de la Nación

deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el presente capítulo. Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior las deudas originadas en cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales y a los siguientes sujetos: Personas humanas o jurídicas que, no revistiendo la condición de: i) MiPymes, ii) entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, y iii) personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el treinta por ciento (30%) del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación... Invítase a las obras sociales y a las aseguradoras de riesgos de trabajo a establecer programas de regularización de deudas en condiciones similares a las previstas en el presente capítulo...” y que “...[p]ara la adhesión al presente régimen no podrán establecerse condiciones adicionales a las explícitamente estipuladas en la presente ley...”.

Por el artículo 16 de la ley de mención se dispuso la exclusión de las disposiciones de aquella a, entre otros, quienes a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la ley 27.562 se encontraren declarados en quiebra y sin que se hubiere dispuesto la continuidad de la explotación.

No obstante, se dispuso que aquellos contribuyentes podrían adherir al régimen a efectos de la conclusión del proceso falencial, siempre que cumplieren con determinados requisitos.

7º) Que, asimismo, por el artículo 4º de la ley N° 27.562, se sustituyeron los dos primeros párrafos del art. 10 de la ley 27.541, y se estableció que el acogimiento al régimen de regularización aludido



producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso, así como la interrupción de la prescripción de la acción penal, aun cuando no se hubiera efectuado denuncia penal hasta ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme y, a su vez, que la *“...cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen, por compensación, de contado o mediante plan de facilidades de pago, producirá la extinción de la acción penal tributaria o aduanera, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. Igual efecto producirá respecto de aquellas obligaciones de idéntica naturaleza a las mencionadas, que hayan sido canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley modificatoria, incluidas, en este supuesto, las inherentes al Régimen Nacional de Obras Sociales...”*.

La misma previsión se estableció en el art. 6, inciso c) de la ley 27.653, publicada en el Boletín Oficial el 11/11/2021, para las obligaciones vencidas al 31/8/2021.

8º) Que, por el art. 5 de la ley N° 27.653, mencionada por el último párrafo del considerando que antecede y en el marco de la cual se consolidó el plan de facilidades de pago del cual se trata por la presente, se establece: *“...Ampliase la Moratoria de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras aprobada por la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, y modificada por la ley 27.562, prorrogándose la vigencia de las mismas, para que las y los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, puedan acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de agosto de 2021 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, a dicho régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones...”*.

Por su parte, por el artículo 12 de la mencionada ley 27.653 se prescribe que *“...El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, reglamentará la presente*





Poder Judicial de la Nación

ley dentro de los quince (15) días corridos y dictará la normativa complementaria e interpretativa necesaria para implementar las condiciones previstas en la misma, asimismo: a) Establecerá los plazos y las formas para acceder al programa de regularización que se aprueba por la presente ley modificatoria, y sus reglas de caducidad...”.

En virtud de ello, por la Resolución General A.F.I.P. N° 5101/2021 por cuya fundamentación se expresó que “...la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 12 de la Ley N° 27.653 y el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997 [por la cual se establecen las facultades reglamentarias de la A.F.I.P.], sus modificatorios y sus complementarios...”, se establecieron los requisitos y las demás formalidades que deberán observarse a fin de solicitar el acogimiento al régimen de regularización.

De esta forma, por el art. 1 de la Resolución General A.F.I.P. N° 5101/2021 se establece: “...Los contribuyentes y responsables de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de esta Administración Federal de Ingresos Públicos, que revistan las condiciones previstas en el artículo 1° del Título I de la Ley N° 27.653, a fin de acceder al beneficio de condonación de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social -incluidos los intereses resarcitorios y/o punitivos, multas y demás sanciones- con los alcances allí previstos, **deberán observar los requisitos y el procedimiento que se establecen en el presente título...**” (confr., el resaltado es de la presente); por los arts. 13 y 14 de aquélla se establecen cuáles son los requisitos y formalidades que deben cumplirse para la adhesión al régimen de referencia y por los arts. 22 y siguientes se establecen las condiciones para acogerse a los planes de facilidades de pago previstos por el régimen aludido.

Por otro lado, por el artículo 46 de la mencionada Resolución General A.F.I.P. N° 5101/2021 se establece: “**Los responsables solidarios** mencionados en el artículo 8° de la Ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, haya mediado o no contra ellos la determinación de oficio prevista en el quinto párrafo del artículo 17 de la citada ley, podrán -en tal carácter- adherir al presente régimen de regularización. En dicho supuesto, y en razón de tratarse de una presentación independiente de la que pudiera realizar respecto de su propia deuda, deberá identificarse al deudor principal y no regirá, respecto del presentante, la obligación establecida en el inciso a) del



artículo 13 de esta resolución general...El sujeto a quien esta Administración Federal hubiera determinado el carácter de responsable solidario, a los fines de la regularización de la deuda ajena, deberá dar cumplimiento solo por sí a la obligación de repatriación del producido de los activos financieros situados en el exterior, de corresponder. Los sujetos que sin mediar determinación de oficio asuman el carácter de responsables solidarios podrán adherir al régimen de regularización con la previsión de que tanto ellos como el deudor principal cumplan con el requisito de repatriación correspondiente, así como con las demás condiciones de admisión del presente régimen...” (la transcripción es copia textual; el resaltado es de la presente).

9º) Que, en el presente caso, de acuerdo con la reseña efectuada por el considerando 5º, D. P. habría cancelado deudas por aportes de seguridad social por los períodos 3/2016 a 9/2016 por sumas coincidentes con las adeudadas por E. S.A., mediante el cumplimiento de un plan de facilidades de pagos consolidado en los términos de la ley 27.653, a su nombre, a título personal.

Si bien el nombrado efectuó dos presentaciones digitales ante la A.F.I.P. por las cuales manifestó su intención de que el acogimiento fuera efectuado a título de responsable solidario de la mencionada sociedad, no se incorporaron otras constancias al respecto.

Además, se advierte que, en el caso, tampoco se ha incorporado información que permita determinar si se acreditó la condición de MIPyME de J. P. o si se presentó la declaración jurada a la que hace referencia el art. 59 RG AFIP 4816/2020 respecto de la contribuyente E. S.A., la cual no tendría condición de MIPyME y respecto de la que, por otra parte, se había declarado la quiebra e inhabilitación el 12/9/2018.

En consecuencia, no se encuentra acreditado hasta el momento el cumplimiento de los requisitos reseñados por el considerando 8º del presente respecto de la contribuyente deudora -respecto de la que, además, no se analizó si podría estar inmersa en una de las causales de exclusión al régimen establecido por la ley 27.541 y ampliado por la ley 27.563 (confr. los últimos párrafos del considerando 6º)-, ni respecto de la persona a la que pretende extenderse el beneficio del régimen en cuestión.





Poder Judicial de la Nación

10º) Que, sin perjuicio de lo establecido por el considerando que antecede, corresponde señalar que, en el caso, también se advierte que a la fecha permanecerían impagos los saldos adeudados por los períodos mencionados correspondientes al Régimen Nacional de las Obras Sociales, todos los cuales superan el monto establecido como condición objetiva de punibilidad por el art. 7 del Régimen Penal Tributario establecido por la ley N° 27.430, por lo que no corresponde hacer lugar a la extinción solicitada.

En este sentido, corresponde señalar que conforme lo expresado por los votos emitidos en los pronunciamientos recaídos en CPE 1051/2018/2/CA2, res. del 11/09/2022, Reg. Interno N° 108/22 y CPE 808/2017/1/1/CA3, res. del 16/6/2023, Reg. N° 253/23 de esta Sala “A”; CPE 537/2018/1/CA1, res. 01/07/2022, Reg. Interno N° 285/22 y CPE 1234/2019/1/CA2, res. del 17/2/2023, Reg. Interno N° 37/23, de la Sala “B” de este Tribunal, en casos como el que se observa en el presente, en el que las deudas correspondientes a los aportes al régimen de obras sociales no fueron canceladas en el término previsto legalmente para acceder a alguna de las salidas del proceso penal reguladas en leyes especiales, y que superan el monto establecido como condición objetiva de punibilidad por el art. 7 del Régimen Penal Tributario establecido por la ley 27.430, no corresponde efectuar un estudio por separado de la situación de cumplimiento, o no, en orden a cada uno de los subsistemas que integran la Contribución Unificada de la Seguridad Social a la luz de las previsiones de la ley 27.541 y sus modificatorias, pues se trata de casos en los que de todos modos no correspondería la extinción de la acción penal ya que, aún de efectuarse una distinción con fines analíticos por verificarse la regularización de los aportes previsionales adeudados en los términos de las leyes de mención, quien se encuentre imputado, continuaría sometido a proceso por el hecho presunto de retención indebida de aportes de un período determinado, con independencia de si se trata de los aportes correspondientes a todos o a sólo algunos de los subsistemas que componen la contribución unificada aludida.

11º) Que, por lo tanto, de acuerdo a lo expresado y a las constancias incorporadas a este legajo, corresponde confirmar la resolución recurrida por la cual se rechazó el planteo de extinción de la



acción penal efectuado por la defensa de D. y J. P. en relación con los hechos examinados en la causa principal vinculados con los periodos fiscales 3/2016 a 9/2016.

El señor juez de cámara, doctor Juan Carlos BONZÓN, expresó:

6º) Que, por el art. 2º de la ley 27.562, sancionada el 13 de agosto de 2020 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 26/08/2020), se sustituyó el art. 8 de la ley N° 27.541, quedando el mismo redactado de la siguiente manera: *“Los contribuyentes y las contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el presente capítulo. Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior las deudas originadas en cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales y a los siguientes sujetos: Personas humanas o jurídicas que, no revistiendo la condición de: i) MiPymes, ii) entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, y iii) personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el treinta por ciento (30%) del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación...Invítase a las obras sociales y a las*





Poder Judicial de la Nación

aseguradoras de riesgos de trabajo a establecer programas de regularización de deudas en condiciones similares a las previstas en el presente capítulo...” y que “...[p]ara la adhesión al presente régimen no podrán establecerse condiciones adicionales a las explícitamente estipuladas en la presente ley...”.

7º) Que, asimismo, por el artículo 4º de la ley N° 27.562, se sustituyeron los dos primeros párrafos del art. 10 de la ley 27.541, y se estableció que el acogimiento al régimen de regularización aludido producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso, así como la interrupción de la prescripción de la acción penal, aun cuando no se hubiera efectuado denuncia penal hasta ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme y, a su vez, que la “...cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen, por compensación, de contado o mediante plan de facilidades de pago, producirá la extinción de la acción penal tributaria o aduanera, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. Igual efecto producirá respecto de aquellas obligaciones de idéntica naturaleza a las mencionadas, que hayan sido canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley modificatoria, incluidas, en este supuesto, las inherentes al Régimen Nacional de Obras Sociales...”.

8º) Que, como se ha expresado por numerosos precedentes anteriores, esa suerte de amnistía condicional establecida por la ley 27.541, con sus modificatorias, está supeditada al acogimiento y posterior cumplimiento de un plan de pagos de obligaciones en infracción correspondientes a recursos de la seguridad social.

Conforme se reseñara por los considerandos precedentes de este voto, la norma que establece ese beneficio, el artículo 8 de la ley, indica que se encuentran excluidos los aportes destinados a obras sociales, los cuales constituyen indudablemente aportes de seguridad social, lo que torna incomprensible el criterio de la legislación de establecer esa excepción.

De todos modos, lo cierto es que el delito que sanciona el artículo 9 de la ley 24.769 y/o el art. 7 del Régimen Penal Tributario establecido por la ley 27.430 se incurre con toda clase de aportes que se



retienen de un mismo haber del trabajador, lo que constituye **un único hecho** por más que lo retenido corresponda a distintas reparticiones (confr. en ese mismo sentido, CPE 1128/2015/1/CA1, res. del 1/12/17, Reg. Interno N° 790/17, CPE 738/2018/2/CA3, res. del 01/07/21, Reg. Interno N° 321/21, CPE 412/2019/10/CA7, res. del 16/07/21, Reg. Interno N° 342/21, CPE 1747/2018/4/CA2, res. del 14/10/21, Reg. Interno N° 471/21, entre otros, de esta Sala “A”).

Esa situación torna inverosímil e incoherente que se condone parcialmente un único delito. Sería como si se condonase la apropiación de bienes objeto de un hurto sólo en cuanto a los bienes de una y no de otra de las habitaciones de la misma vivienda con motivo de que fueran distintos sus ocupantes.

Ante esa incomprensible distinción, se impone interpretar la ley de una manera razonable y sistemática que resulte armónica con el resto del ordenamiento jurídico, evitando darle un alcance que ponga en pugna sus disposiciones entre sí y con el resto del ordenamiento. Ese es el criterio establecido por la Corte Suprema de la Nación en numerosos precedentes. Tal como se señala en el caso de Fallos 312 :2075: “...para la interpretación de la ley es menester dar pleno efecto a la intención del legislador, y es regla de hermenéutica de las leyes atender a la armonía que ellas deben guardar con el orden jurídico restante y con las garantías de la Constitución Nacional...” (confr. C.S.J.N. FALLOS 319:1765; 283:239; 301:1149 y 303:612, entre otros).

En ese sentido, los términos en que se encuentra concebido el artículo 10 de la ley 27.541 (tanto en su texto original como en aquél previsto por la ley N° 27.562) ponen en claro que para la suspensión y posterior extinción de la acción penal se requiere únicamente el acogimiento al régimen de regularización del que se encuentran excluidos determinados conceptos. Esa disposición se compatibiliza con la del artículo 8 de la ley, en tanto se entienda que, con respecto a esas exclusiones, persiste la obligación del empleador de depositar lo retenido sin nuevos plazos ni condiciones y sin exención de intereses ni multas.

9º) Que, en el caso, en lo que respecta a la decisión de no hacer lugar a la extinción de la acción penal solicitada por la defensa de





Poder Judicial de la Nación

D. y J. P., en relación a los hechos examinados vinculados con los periodos fiscales 3/2016 a 9/2016, adhiero a la conclusión a la cual arribó mi colega preopinante por el considerando 10º de su voto.

Ello así pues, en este caso concreto, aún si se verificara debidamente la regularización de la deuda de E. S.A. por los aportes correspondientes a la seguridad social de los períodos 3/2016 a 9/2016 en los términos establecidos por la ley 27.541 y sus modificatorias, lo cierto es que carecería de sentido disponer la extinción de la acción tan sólo con respecto a la omisiones de depositar los aportes relativos al régimen de la seguridad social de aquellos meses, cuando, de todos modos, la acción penal relativa a los mismos hechos únicos subsistiría (teniendo en cuenta los montos omitidos de ingresar en orden a las omisiones de depósito de los aportes al régimen de las Obras Sociales, según la información con la que se cuenta actualmente en la causa) y no podría, por ende, disponerse un sobreseimiento con respecto por las obligaciones (previsionales) admitidas en los términos de la ley de regularización de la que se trata (confr. los votos del suscripto en CPE 1051/2018/2/CA2, res. del 11/09/2022, Reg. Interno N° 108/22 y CPE 808/2017/1/1/CA3, res. del 16/6/2023, Reg. Interno N° 253/23, de esta Sala “A”).

Por ello, **SE RESUELVE:**

I. CONFIRMAR la resolución apelada.

II. CON COSTAS (arts. 530, 531 y ccs. del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese de conformidad con lo dispuesto por la resolución N° 96/2013 de superintendencia de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y devuélvase junto con los autos principales y la documentación.

Se deja constancia que firman únicamente los suscriptos por encontrarse inhibido el Dr. Roberto Enrique HORNOS (confr. nota de fs. 54) y conforme lo autoriza el art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional.



JUAN CARLOS BONZON
JUEZ DE CÁMARA

CAROLINA L.I. ROBIGLIO
JUEZ DE CÁMARA

ANTE MI

MARIA LUCILA BIENATI
SECRETARIA DE CÁMARA

